



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Proyecto discutido y aprobado en sala virtual

Demandante: MIRIAM DEL SOCORRO MARÍN MARÍN
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES- Y LA ADMINISTRADORA DE FONDO DE
PENSIONES Y CESANTÍAS -PORVENIR S.A.-
Radicado: 05001 31 05 011 2018 00561 01
Sentencia: S-145

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por la apoderada judicial de Colpensiones, VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO -con las mismas facultades a ella conferidas-, a favor de la abogada ÁNGELA PATRICIA OJEDA MUÑOZ identificada con la T.P. 286.078 del C. Superior de la Judicatura, para representar a la parte demandada Colpensiones en este proceso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite a los recursos de apelación interpuestos por la apoderada judicial de la sociedad demandada PORVENIR S.A. y por el apoderado judicial de Colpensiones en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de septiembre de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

MIRIAM DEL SOCORRO MARÍN MARÍN demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además el pago de las costas procesales.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 01 de mayo de 1963, se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el año 1982; que se trasladó a PORVENIR S.A. en el mes de febrero el año 2006, agrega que dicha administradora no le brindó ni en la antesala de la afiliación, ni durante la misma, la información acerca del monto de capital que debía acumular para acceder a una pensión ordinaria, no se le explicó sobre la pensión anticipada, sobre la garantía de pensión mínima, el derecho al retractor, los factores que influenciaban el monto de la prestación, el bono pensional. Refiere que al momento de hacer la afiliación no se le solicitó información acerca de su cónyuge y sus hijos, situación que activa la invalidez de la vinculación.

Expresa que solicitó a la AFP PORVENIR S.A. realizar la proyección de la mesada pensional, indicando la administradora el 06 de febrero de 2018 que, realizada la simulación para la edad de 57 años, la mesada

en la AFP PORVENIR ascendería al salario mínimo, es decir a \$781.242, mientras que, en el RPMPD, equivaldría a \$1.135.000.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda pues carecen de fundamento legal y fáctico; frente a los hechos dice que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante, también la de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales, manifiesta que no le consta la eventual reunión o no con los asesores de PORVENIR S.A., tampoco la información que se le proporcionó a la demandante, pues son hechos de un tercero ajenos a Colpensiones. Como excepciones propuso inexistencia de declarar ineficaz o nula la afiliación, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

Por su parte, PORVENIR S.A. dice que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación de la demandante a esa administradora, la proyección de la prestación entre regímenes realizada por PORVENIR S.A., siendo una simulación o cálculo que no es definitivo. Manifiesta que no es cierto que los asesores de la administradora no proporcionaran la información correspondiente a la actora relacionada con el traslado de régimen, por cuanto a la misma se le suministró información suficiente, completa y clara sobre las condiciones legales de cada régimen. Como excepciones propuso prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo, enriquecimiento sin causa e innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 10 de septiembre de 2020, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia de la

afiliación al RAIS de la señora MIRYAM DEL SOCORRO administrado por PORVENIR S.A.; ii) ordenó a la PORVENIR S.A. a trasladar del RAIS al RPMPD administrado por COLPENSIONES a la señora MIRYAM DEL SOCORRO; iii) ordenó a PORVENIR S.A. a trasladar los aportes de la demandante como son cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, gastos de administración, con todos sus frutos e intereses en razón a la declaración de la ineficacia del traslado, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y el 0,5% destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima con anterioridad al año 2004; y a partir del 01 de enero de 2004 el 1,5% correspondiente a la garantía de la pensión mínima a COLPENSIONES; iv) a COLPENSIONES a recibir los dineros entregados por PORVENIR S.A. y reactivar la afiliación de la señora MIRYAM DEL SOCORRO sin solución de continuidad; y, v) condenó en costas a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, PORVENIR S.A. interpuso recurso de apelación en lo relacionado con el traslado a Colpensiones de los gastos de administración, pues son descuentos realizados con fundamento en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, que se generan tanto en el RPMPD como en el RAIS. Agrega que no se está ocasionando ningún detrimento a la cuenta de ahorro individual de la afiliada debido a que los rendimientos causados han incrementado el valor de la cuenta.

Además, los dineros pagados a las aseguradoras ya están en manos de terceros y cubrieron unas contingencias distintas a la pensión de vejez. Con la decisión de traslado de los gastos de administración se estaría generando un detrimento a la entidad y un enriquecimiento a COLPENSIONES, más cuando siempre ha actuado de buena fe.

Por su parte la apoderada judicial de COLPENSIONES dice que difiere de la orden de condena en costas a cargo de esa administradora por

cuanto ha obrado en cumplimiento de un deber legal y de buena fe, además, la demandante se trasladó de régimen de forma libre y voluntaria y COLPENSIONES sólo fue llamada como consecuencia de los derechos de la actora y por ende no hay lugar a imponerle costas de ninguna naturaleza.

Se conoce del asunto también vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES, en lo no recurrido por la entidad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la parte demandante presentó dentro del término alegatos de conclusión, solicitando sea confirmada la sentencia de primera instancia dado el reiterado precedente del órgano de cierre en estos escenarios, pues como bien se dice en la ratio decidendi no se probó por parte de las administradoras de pensiones, que a la demandante se le hubiere dado una información plausible que dejara incólume el consentimiento informado, ineludible en el tópico de las afiliaciones o traslados de regímenes.

Agrega que no se puede perder de vista que el artículo 271 de Ley 100/93 de manera categórica dispuso que cualquier persona natural o jurídica que atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de régimen, además de la multa que ello conlleva, comporta la aniquilación de la misma, con la facultad expresa de realizarse nuevamente en forma libre y espontánea, dados los efectos ex tunc que comporta -desde siempre-. Por lo anterior, solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por la apoderada de PORVENIR S.A. y por la apoderada de

COLPENSIONES a través del recurso de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA, -en lo no recurrido- con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la Sra. MIRIAM DEL SOCORRO MARÍN MARÍN realizada al RAIS, así como las órdenes consecuenciales respecto a los dineros que PORVENIR S.A. queda en la obligación de devolver.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MIRIAM DEL SOCORRO MARÍN MARÍN nació el 01 de mayo de 1963; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 02 de noviembre de 1982, acumulando en esa entidad un total de 1007.86 semanas, conforme a la historia laboral allegada por Colpensiones al proceso; **iii)** el 23 de febrero de 2006 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A., **iv)** en el mes de abril de 2006 se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. entidad en la que se encuentra actualmente afiliado.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación

Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Así lo señaló desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando con el transcurso de los años, y en el año 2019 la tesis fue afianzada, como puede verse, entre otras, en las sentencias SL 1421, SL 1452, SL 1688 y SL 1689, todas, se repite del 2019. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

En la SL 1452-2019, Rad. 68852 del 3 de abril de 2019, la Corte Suprema de Justicia robusteció el criterio que apunta a considerar, como ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado, los siguientes: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente,

pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) que le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del art. 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) que no es necesario estar ad portas de causar el derecho o tener un derecho consolidado para que se produzca la ineficacia del traslado.

En la misma providencia, se analizaron los diferentes estadios de la evolución normativa respecto de esta exigencia, cada uno de ellos con regulaciones propias que apuntan a la misma finalidad en cuanto a la garantía para el afiliado de su derecho a una debida información, bien al momento de elegir el régimen pensional, ora cuando opte por trasladarse de régimen. Exigencias que se tornan cada vez más rigurosas, así:

1. Partiendo de una primera fase, compuesta por aquellas disposiciones que se derivaron de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 13 literal b), 271 y 272, así como el decreto 663 de 1993 o Decreto Orgánico del Sistema Financiero dentro del cual se hallan inmersos los fondos de pensiones, momento para el cual, el alcance mínimo del deber de información incluía la ilustración de *"las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales"*
2. Vino luego una segunda etapa a partir de la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010, caracterizado porque obligó al análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y de los pormenores de los regímenes pensionales, Y

3. Un tercer periodo que viene dado desde la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015, tildada como la ley de doble asesoría, el cual lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

En el presente caso, no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que este pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, incumplió el Fondo privado su deber de información al afiliado, al no suministrarle, *"en forma clara y precisa, las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen"* (SL 1689-2019).

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

"Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso

*de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].***

Lo anterior permite dar aplicación al art. 271 de la ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración (gastos de administración), tema cuestionado en el recurso de apelación de PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES, de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que un trasunto natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en la sentencia 68838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 – 2008, SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, en las cuales se dijo que:

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del 12 Rdo. 05001 31 05 007 2019 00167 01 actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, **con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil**, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado. “Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, **ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido**, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del Código Civil” (Resalta la Sala).*

Si bien es cierto por regla general los actos jurídicos son celebrados para que sean eficaces y produzcan efectos jurídicos propios, cuando tales actos jurídicos no resultan eficaces, por haber nacido viciados en el sentido amplio del término, desde el comienzo o incluso porque llegan a desaparecer por un evento posterior a la celebración del acto, se traduce en que nunca produjeron efectos o que habiéndolos producido dejan de generarlos por una causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. En el primer evento, esto es, cuando se considera que el acto nunca produjo efectos, como en este caso acontece, las cosas vuelven a su estado anterior, como si aquel jamás hubiera nacido a la vida jurídica.

Lo anterior fue ratificado en la sentencia de la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, en la que se dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos***

retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia. (...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional. (...)

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima» (Resaltado por la Sala).

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será confirmada también en este aspecto.

Ahora en lo que tiene que ver con la condena en costas impuesta a cargo de COLPENSIONES, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Pero, en estos casos, la condena a COLPENSIONES a recibir el valor de los aportes realizados a la AFP del RAIS y a reactivar la afiliación de la demandante, es solo la consecuencia lógica de la orden previamente impartida en este proceso, en el sentido de declarar la ineficacia de esa afiliación al RAIS, de manera que bien puede decirse que, sin esta orden, aquellas condenas no se hubieran producido. Dicho de otro modo, era inexigible otra conducta para COLPENSIONES antes de que la presente declaratoria de ineficacia del traslado se hubiere proferido, pues esta entidad no es autoridad judicial como para resolver, antes del proceso, la reclamación de la demandante.

Costas en esta instancia por haber resultado vencida en el recurso, a cargo de PORVENIR S.A. a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el día 10 de septiembre de 2020 en cuanto condenó en costas a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, para en su lugar absolverla por este concepto. En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$908.526.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso. En constancia firman.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 113
del 30 de junio de 2021

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a7049b046cae4f226b1d6275e305a16b51d3d71cf25d936a50fd4755ba74a2b0**

Documento generado en 29/06/2021 11:32:45 AM